

C.A. de Santiago

Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

Al folio 6: Téngase presente.

**VISTO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, recurrió de amparo constitucional don Tomás Alonso Reyes Arancibia, abogado, en favor de los intereses de LEANDRO ANDRES ALVARADO URTUBIA, en contra de la Jueza titular del 14° Juzgado de Garantía de Santiago doña Jacqueline Karen Atala Riffo, por haber decretado orden de aprehensión en contra del amparado, sin ajustarse a la normativa regulada para el caso, lo que afecta y perturba su garantía constitucional de la libertad personal consagrada en el artículo 19 N° 7, en relación con el artículo 21 de la Constitucional Política de la República.

Indicó que, en audiencia de 3 de mayo pasado en causa Rit 8054-2021, correspondiente a juicio oral simplificado, el amparado concurrió en calidad de imputado del delito de amenazas por medio virtual, sin lograr conectar su micrófono, razón por la que otorgado traslado el Ministerio Público solicitó se despachara orden de detención, por su falta de comparecencia encontrándose válidamente notificado.

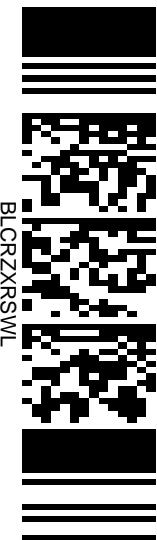
Señala que a pesar que la defensa se opuso a la petición, desde que su defendido se encontraba presente y con un evidente problema de conexión, la magistrada accedió a lo solicitado y emitió una orden de aprehensión en contra del amparado.

Agrega que, la resolución no se ajusta a la Constitución ni a las leyes, desde que, conforme a distintas disposiciones del Código Procesal Penal, para decretar una orden de detención, la incomparecencia del imputado a la audiencia debe ser injustificada y que, para el caso, su representado sí estuvo presente, aun cuando no pudo conectar su micrófono, por ello no es posible interpretar extensivamente las normas y tenerle como ausente a la audiencia, pues en los hechos estuvo presente.

Concluye, solicitando se acoja la acción y se disponga a dejar sin efecto la orden de aprehensión dictada en contra del amparado por no verificarse los presupuestos legales para decretarla.

**SEGUNDO:** Que, informando doña Jacqueline Karen Atala Riffo, jueza Titular del Decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago, manifestó que el 3 de mayo pasado, le correspondió conocer y resolver en causa RIT 8054-2021, por el delito de amenazas en audiencia para el juicio oral efectivo en contra del amparado.

Que en aquella instancia se encontraban presentes todos los testigos del Ministerio Público y el juicio no pudo realizarse por cuanto el requerido no conectó



su audio, a pesar de las gestiones efectuadas por los funcionarios del tribunal y por la propia jueza.

Señala que, atendido el entorpecimiento, pospuso la audiencia prácticamente una hora para permitirle al requerido concurrir ya a la oficina de su abogado, ya al tribunal, sin que el imputado cumpliera con dicha concurrencia.

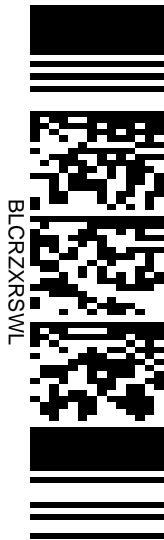
Agrega que, la regla general es que los imputados deben concurrir al tribunal, si no cuentan con la tecnología para comparecer remotamente, y por ello, cada interviniente, imputado, víctima, testigos o peritos si figura conectado, pero no activa su cámara o su audio, se le considera no presentado, pues en los hechos equivale a que no ingrese a la sala de audiencias y se quede desde el pasillo observando lo que allí ocurre, sin perjuicio de lo anterior, señala que en caso de darse órdenes de detención, siempre existe la posibilidad que el imputado pueda presentarse de forma voluntaria a las dependencias del tribunal hasta las 13:30 horas, circunstancia que tampoco ocurrió.

Concluye manifestando que al tribunal le llamó la atención la multiplicidad de procesos seguidos en contra del amparado, en las cuales, si se ha conectado remotamente sin problemas y, en consecuencia, se trata de una resolución dictada conforme al mérito del proceso, con estricto apego a la normal legal y conforme a derecho por un Tribunal de la República, previo debate entre intervinientes, por lo que no vislumbra vulneración de garantías fundamentales.

**TERCERO:** Que, el recurso de amparo constituye jurídicamente una acción cautelar, de índole constitucional, cuyo contenido específico es el requerimiento de tutela jurisdiccional frente a privaciones de libertad ambulatoria, con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, frente a amenazas ilegales al ejercicio de dicha libertad y frente a privaciones, perturbaciones o amenazas a la seguridad individual, sin limitaciones y sin que importe el origen de tales atentados.

**CUARTO:** Que el acto que motiva la presente acción constitucional es la decisión del respectivo juez de Garantía de ordenar se despache orden de detención en contra del amparado, ante la incomparecencia de aquel a la audiencia de juicio oral simplificado, que en concepto del recurrente, no se encuentra ajustada a derecho y resulta arbitraria e ilegal, al haber efectuado una interpretación extensiva de las normas que habilitan la detención del imputado que, válidamente notificado no comparece injustificadamente a la audiencia respectiva.

**QUINTO:** Que, en consecuencia, se advierte que la decisión que motiva el presente recurso fue dictada por autoridad competente y en un caso previsto por la ley; sin que pueda inferirse, de los antecedentes esgrimidos cómo puede constituir



una perturbación o amenaza al derecho a la libertad personal del amparado, lo que conduce al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre tramitación de la presente acción cautelar, **se rechaza** el recurso de amparo interpuesto por Tomás Alonso Reyes Arancibia, en favor de LEANDRO ANDRES ALVARADO URTUBIA, en contra de la Magistrada titular del 14° Juzgado de Garantía de Santiago doña Jacqueline Karen Atala Riffo.

**Regístrese, y en su oportunidad archívese.**

**N°Amparo-1844-2022.**



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L., Ministro Suplente Rodrigo Ignacio Carvajal S. y Abogado Integrante Jose Ramon Gutierrez S. Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

